

Es copia que certifico. México, Marzo 22 de 1875.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D. Ramon Alvarez Nieto, contra una resolucioñ del Tribunal Superior del Estado, por violacion de garantias.*

*Pedimento del C. Promotor Fiscal.*

C. Juez de Distrito:

El Fiscal dice: A las razones aducidas en su pedimento de 30 de Noviembre último, pasa á exponer algunas otras consideraciones que robustecen la opinion consignada en él.

Acusado el Juez de 1ª instancia, accidental, Mateo Olan, ante la 2ª Sala del Tribunal Superior, á quien tocó en turno, ésta se vió en el caso de decidir á qué actuaciones se debía estar, en el juicio verbal seguido entre los Sres. Alvarez y Gutierrez, sobre la desocupacion de una casa; es decir, si á las practicadas hasta el 22 de Diciembre de 1873, ó á las posteriores. La Sala, con vista del juicio original respectivo, compulsas libradas y lo alegado por las partes, formuló su sentencia declarando la responsabilidad del acusado, la pena á que se habia hecho acreedor, y revocó sus procedimientos; dejando como consecuencia forzosa, en toda su fuerza, los efectos de las sentencias anteriores, que dirimieron los puntos controvertidos. Esa sentencia ha sido confirmada en todas sus partes por la otra Sala.

Este Ministerio cree, que no puede negarse la competencia del Tribunal Superior, para conocer de los delitos, faltas y abusos de sus inferiores, por ser una facultad que las leyes relativas le han acordado siempre. Es un hecho tambien, que al juez

acusado se le aplicó la ley vigente en el Estado, de 24 de Marzo de 1813; resultando de estos dos conceptos, que no ha habido violacion del art. 14 y menos del 16 de la Constitucion, que invoca el quejoso.

Es cierto que esos fallos afectan profundamente providencias que eran favorables á éste, y que fueron declaradas sin valor alguno. Mas precisamente este era el objeto y fin del juicio de responsabilidad instaurado contra el juez que las dictó, y que no podian subsistir por estar en abierta pugna con decisiones dadas con anterioridad sobre los mismos puntos. Así lo establece el art. 8º de la ley citada de 24 de Marzo, y no es cierto que las salas hayan mandado abrir nuevo juicio, pues por el contrario, decretaron la cesacion é ineficacia del procedimiento del juez acusado.

Y bien: ¿la justicia federal podrá meter la mano en los procedimientos de los jueces superiores y en los del Tribunal superior, que han entendido en aquellos juicios? Evidentemente no; pues segun el art. 117 de la Constitucion, las facultades que no estén expresamente concedidas por ella á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados, y entre ellas no está la de revisar los actos y decisiones de los tribunales de éstos, mientras no violen algun precepto constitutivo.

La concesion del amparo produciria consecuencias terribles en el presente caso. Ella nulificaria las sentencias tantas veces mencionadas, de 25 de Julio y 22 de Diciembre de 1873, dictadas en el curso de un procedimiento-legal: legalizaria el proceder del juez D. Mateo Olan: vulneraria en lo mas esencial las resoluciones de las Salas del tribunal superior de justicia del Estado, y lo que seria mas funesto, entrafaria la ruina de D. Pedro Gutierrez Vargas, que no es parte en este juicio; pues de seguro el sucesor de aquel, abrirá la ejecucion pendiente, y concluirá por rematar la finca embargada. Con tales fundamentos, esta fiscalia pide á vd., determine conforme tiene solici-

tado en el pedimento mencionado en un principio.

San Juan Bautista, Diciembre 16 de 1874.—*José Payró.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Diciembre 31 de 1874.—*Gabriel Sosa*, secretario.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

S. Juan Bautista, Diciembre 22 de 1874.

Visto: el curso que con fecha 29 de Setiembre último presentó á este Juzgado el C. Ramon Alvarez Nieto, demandando el amparo federal, contra una providencia ó acuerdo fecha 26 del mismo mes, dada por el Tribunal pleno, mandando al Juez 2º de de paz de esta capital la suspensión de sus procedimientos en el juicio ejecutivo que á mocion del mismo Alvarez seguia contra el C. Pedro Gutierrez Vargas, como tambien contra una sentencia de la 2ª Sala del mismo Tribunal, fecha 18 del mismo Setiembre, dada en el juicio de responsabilidad, actuado contra aquel, en la cual se revocó un fallo favorable al Sr. Nieto. Vistos: los informes oficiales, pedimentos fiscales, justificantes y demás constancias de este mismo juicio: el auto de 4 del corriente, en que se mandó hacer acumulacion de los autos de éste á los del nuevo juicio de amparo promovido por el propio Alvarez, en 30 de Noviembre último, contra una sentencia de la 1ª Sala del Tribunal Superior, que el promovente dice ser de 27 del mismo mes, pero sucesivamente se ha comprobado ser de 21, en la cual se confirma en todas sus partes la de 18 de Setiembre, uno de los actos que motivaron el primer amparo. Vistas: las actuaciones corrientes en este segundo juicio, con todo lo demás concerniente, el Tribunal forma los siguientes conceptos:

1º No es ya del caso determinar si procede el amparo contra el acuerdo del Tribunal pleno, de 26 de Setiembre último, en virtud de que esta providencia que tuvo un efecto muy transitorio, ningun valor tiene

en la actualidad. Por lo tanto, el Tribunal cree deber abstenerse de entrar en apreciaciones acerca de este acto judicial y de los fundamentos jurídicos en que el demandante se apoyó para argüir su inconstitucionalidad.

2º La sentencia de la 2ª Sala, de 18 de Setiembre, y la de la 1ª de 21 de Noviembre último, vienen á ser un mismo acto, supuesto que la 2ª no es mas que la confirmacion de aquella en todas sus partes. Por consiguiente, el objeto del examen judicial, con abstraccion de todas las alegaciones redundantes de la parte actora, debe ser si la revocacion que en aquella se hizo de un auto del Juez 2º de paz, en la sentencia recayente al juicio de responsabilidad que se le siguió por acusacion de D. Pedro Gutierrez Vargas, importa violacion de alguna de las garantías individuales, consagradas en el Código fundamental de la Nacion.

3º En la demanda se alega que tal acto viola la garantía contenida en el artículo 14, porque de él resulta haberse condenado al demandante á la pérdida de sus derechos sin oírlo ni juzgarlo en la forma y términos legalmente establecidos (fs. 16.)

4º El art. 14 de la Constitucion encierra los siguientes conceptos:

No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anticipacion al hecho, exactamente aplicadas á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley.

5º Tecante al primer concepto, claro es que ninguna relacion tiene con el caso en cuestion. Con respecto al segundo, la sentencia de que se trata al determinar la revocacion mencionada, ha tomado por fundamento el art. 8º de la ley de 24 de Marzo de 1813: por lo tanto, bajo el punto de vista de la anterioridad de la ley, el precepto constitucional ha quedado iluso. Igual conclusion tiene lugar respecto de la anterioridad del Tribunal; pero ¿podrá decirse lo mismo en orden á la exacta aplicacion de la ley? El Tribunal se ve precisado á re-

conocer, que en cuanto á este punto, las sentencias de 18 de Setiembre y 21 de Noviembre, violan el referido art. 14.

6º Desde luego llama la atencion, que en un juicio destinado puramente á declarar la responsabilidad de un juez por infracciones de ley, cometidas en el ejercicio de su ministerio, venga consignándose un punto en que se vulneran gravemente los derechos de un tercero que no ha sido oído como parte en el juicio en ninguna de sus instancias, ó el art. 8º de la ley de 24 de Marzo de 1813, puede autorizar tamaña irregularidad? Los asesores que han aconsejado aquellas sentencias así lo asientan; pero el Tribunal, combinando el referido artículo con el 20º de la propia ley, en la genuina inteligencia del uno y otro, se persuade que aquellos señores han dado al primero de dichos artículos una interpretación inexacta, seguramente por no haberse fijado en el precepto bastante claro que contiene el segundo. Al final de este, se dice terminantemente que: en el juicio de responsabilidad, no se tratará de abrir el anterior; es decir, aquel en que se ha cometido la falta acusada, sino únicamente de calificar si es ó no cierto el delito del Juez ó Magistrado, para imponerle la pena que merezca. Es, pues, visto por esta prevención, que las sentencias dadas sobre juicios de responsabilidad, no pueden afectar los actos judiciales de que estos se originan.

7º Teniendo presente esta regla, se comprende bien el sentido en que debe tomarse el artículo 8º. Dice este: «La imposición de estas penas en sus respectivos casos acompañará precisamente á la revocación de la sentencia de primera instancia dada contra ley expresa.» La inteligencia de este artículo, en concepto de este Juzgado, es que cuando por consecuencia de apelación, súplica ó recurso de nulidad, se revoque una sentencia dada contra ley expresa, nunca dejará de imponerse al Juez la pena en que haya incurrido; pero no que en las sentencias de juicios de pura responsabilidad,

se haya de envolver la revocación de fallos que no han sido llevados á la revisión superior por virtud de los mencionados recursos.

8º Las autoridades cuyos informes han sido recogidos en los juicios acumulados, lo mismo que el 6º promotor fiscal, han llamado la atencion del Tribunal acerca de los términos ofensivos de que se ha servido el C. Ramon Alvarez Nieto, en sus diferentes escritos respecto de los funcionarios contra quienes se queja, y han solicitado se reprima esta falta con el condigno castigo. Se observa en efecto, que algunas de las expresiones del Sr. Alvarez, exceden los límites de la justa defensa, particularmente las que se leen en uno de sus escritos, fojas 55 vuelta, en la parte marcada al márgen con el signo «ojo.» El derecho de petición no puede ejercerse sino de una manera pacífica y respetuosa, y el Tribunal convencido de que el Sr. Alvarez ha faltado á la segunda de estas condiciones, está en el deber de amonestar severamente á este ciudadano por la inconveniencia de su lenguaje, previniéndole guarde en lo sucesivo el comedimiento debido, so pena de ser corregido de una manera mas eficaz.

9º El documento últimamente presentado por el promovente, es ageno del presente juicio; sin embargo, continuará unido á estos autos para lo que la Superioridad se sirva disponer.

Resultando de los considerandos quinto, sexto y sétimo, que la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de 18 de Setiembre último, y por consiguiente la de 21 de Noviembre que la confirma, violan el artículo 14 de la Constitución Nacional, por cuanto hacen una aplicación inexacta de la ley de 24 de Marzo de 1813, segun lo que en los mismos considerandos queda razonado, el Tribunal, con fundamento del artículo 101 de aquella, falla definitivamente:

« 1º La Justicia de la Union ampara y protege al C. Ramon Alvarez Nieto, contra

los expresados fallos, en cuanto á la revocación que en ellos se hace de la providencia pronunciada por el Juez 2º de Paz, el 26 de Junio de este año.

2º Se declaran puntos resolutivos los consignados en los considerandos octavo y noveno.

3º Sacadas las copias de estilo, remítanse los autos á la Superioridad para los fines de la ley. Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado y firma conmigo su Escribano que doy fé.—*L. Correa.*—Ante mí, *Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Diciembre 31 de 1874.—*Gabriel Sosa,* Secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Marzo 6 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por D. Ramon Alvarez Nieto, contra la resolución del Tribunal Superior del Estado por la cual se mandó al Juez 2º de paz de San Juan Bautista suspender la ejecución de la sentencia que había pronunciado en un juicio seguido por el solicitante con D. Pedro Gutierrez Vargas y contra los fallos de las Salas 1ª y 2ª del mismo Tribunal, por los cuales se revocó posteriormente la expresada sentencia en la causa que se abrió contra el Juez 2º de Paz, por sus procedimientos en el juicio civil de que se ha hecho mención; manifestando el quejoso, que esas resoluciones vulneran en su persona la garantía que consigna el art. 14 de la Constitución Federal en la parte que declara que nadie puede ser juzgado sino por leyes exactamente aplicables al caso en cuestión; considerando: que las Salas 1ª y 2ª del Tribunal de Justicia de Tabasco han sido competentes para conocer de la responsabilidad que el C. Pedro Gutierrez Vargas, exigió al Juez 2º de Paz de San Juan Bautista y que por

lo mismo, obrando en la órbita de sus facultades al fallar de la manera que lo creyeron justo, no han violado en la persona del quejoso ninguno de los derechos que la Constitución le garantiza; sin perjuicio de la responsabilidad en que crea que hayan podido incurrir los CC. Magistrados de dichas Salas por la injusticia del fallo en lo intrínseco de la cuestión, para exigir la cual, tiene expedidos sus derechos.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, se declara:

1º Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 22 de Diciembre del año pasado, que declaró haber lugar al amparo de la Justicia Federal en el presente caso.

2º La Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Ramon Alvarez Nieto contra las sentencias de las Salas 1ª y 2ª del Tribunal de Justicia del Estado, que han dado origen á este recurso.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Arza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa,* oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Julio 1º de 1875.—*Enrique Landa,* oficial mayor.